

LA BANANERA CHIQUITA BRANDS DE EEUU ARMÓ A LOS PARAMILITARES COLOMBIANOS

Publico 29/12/2009

La Fiscalía de Colombia pedirá la extradición de los directivos de Chiquita, la antigua United Fruit Co. La Justicia acusa a la multinacional de financiar una red que perpetró 11.000 asesinatos

La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacres y apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo, que **ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.**

La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por "**concierto para delinquir agravado**". El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la "protección" de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.

La frutera facilitó miles de fusiles y millones de balas a grupos armados

Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto estadounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, "es **el caso más grande de terrorismo de la historia reciente**, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York". Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Albuquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.

"República bananera" ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruterías estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 **aniversario de la "matanza de las bananeras"** perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central en *Cien Años de Soledad* de Gabriel García Márquez.

Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. Las declaraciones voluntarias de los jefes *paras*, en el marco de la "Ley de Justicia y Paz", que les garantiza impunidad a cambio de la "verdad" y de una improbable "reparación" a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores de los derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el **protagonismo de "bandas emergentes"**, como las Águilas Negras.

Confesiones de paramilitares

Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcaciones *Chiquita Bremen* y *Chiquita Belgie* embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.

Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los *paras* por su "protección". Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company